Juicios orales, ¿panacea?

Enseguida me referiré a una aportación de los últimos años, tan alborozados cuando se trata de ofrecer milagros; una aportación que surgió henchida de promesas, sobre la que aún no es posible dictar un juicio definitivo que abarque todos sus extremos. No haré el panegírico de la llamada “nueva justicia penal” —que todavía debe probar su condición de “justicia”—, a la que se han tributado tantos elogios, ni caeré en la diatriba, que también se ha frecuentado. Sólo recordaré que hace algún tiempo, en un espasmo reformador, elevamos las banderas del sistema acusatorio (algunos optan por hablar de sistema adversarial, con flagrante anglicismo, y otros entienden que se trata de cuestiones diferentes) y de los juicios orales, animados por series de televisión presenciadas por algunos reformadores desde una cómoda butaca, y por reformas legales en otros países, que no necesariamente constituyen el “lecho de Procusto” para acomodar a la justicia de todo el universo.

Vale traer a estas líneas una reflexión interesante sobre el asunto que muy brevemente estamos examinando. Al referirse a la reforma procesal penal en América Latina, a la que México se ha sumado, Juan Luis Gómez-Colomer afirmó —siguiendo una expresión de Bernd Schünemann—, que “parece como si el modelo de enjuiciamiento criminal de los Estados Unidos de América se hubiera instaurado en un desfile militar y marchara triunfalmente ante los espectadores presentes arrollando cualquiera otra iniciativa”. En nuestra deliberación vernácula se cuestionó —con razones persuasivas, por supuesto— el procedimiento penal imperante. Al hacerlo, se dijo que el sistema acusatorio relevaría al inquisitivo —con olvido de que Venustia-

no Carranza propuso y el Constituyente adoptó un sistema cercano al acusatorio— y que los juicios orales nos sacarían del precipicio.

El debate sobre estas novedades ha sido intenso. He intervenido en él, procurando equidistancia —y también objetividad— entre los pareceres encontrados. Abundan los diti-rambos, amparados tanto en los méritos de un cambio de paradigma que extrae la justicia del abismo, como en la experiencia de otros medios. También menudean las objeciones. Por vía de ejemplo mencionaré algunos cuestionamientos. En cuanto a mi punto de vista, en bien de la brevedad me remito al examen detallado que hice en diversos trabajos: los libros *La reforma penal constitucional. 2007-2008. ¿Democracia o autoritarismo?*, y *El procedimiento penal. Constitución y Código Nacional*.

El profesor Moisés Moreno Hernández ha destacado la influyente concurrencia a la reforma constitucional mexicana de 2008 que tuvieron la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa injerencia —menciona— “ha encontrado aceptación en muchos países de la región, sobre todo porque ella ha ido aparejada de apoyos económicos; y, cuando se trata de una cuestión económica, surge también la idea del «negocio» [...] la reforma procesal penal en América Latina se ha convertido para algunos en un gran negocio”. En este orden de “realidades” han surgido —señala el mismo tratadista— “empresarios jurídicos”, “activistas expertos” y “expertos improvisados”. Estas y otras apreciaciones sugieren que la famosa reforma es el reflejo de una pretensión hegemónica.

Nuestro colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enrique Cáceres, ha cuestionado el nuevo sistema, receptor de notorias *dispraxis*. Éstas ocurren “cuando se trasplantan irresponsablemente instituciones de sistemas insertos en dinámicas sociales e institucionales diferentes a las del sistema trasplantado. Un claro ejemplo de esta *dispraxis* se encuentra en la reforma penal que instituye en México el sistema penal acusatorio importando instituciones de la familia anglosajona”.

El abogado y tratadista Jesús Zamora Pierce ha formulado incisivos comentarios sobre los juicios orales —parte de una “mitología”, sostiene— y el traslado del *plea bargaining* al sistema procesal mexicano. Zamora Pierce considera que el flamante sistema incorpora fuertes ingredientes inquisitivos, además de que los juicios orales no son, en modo alguno, su rasgo característico.

No quiero restar bondades al propósito que alentó el giro procesal en México. Creo que las intenciones de algunos reformadores o innovadores fueron excelentes, aunque desmesuradas. Ofrecieron lo que no cabía esperar del sistema acusatorio ni de los juicios orales, que no pueden más que lo que pueden, para decirlo con sabiduría de Perogrullo. En realidad, no emprendimos un sistema de juicios orales, sino un método convencional de solución de conflictos, negociado entre el poderoso MP y el no tan poderoso inculpado, o bien, entre la víctima y el victimario.

El modelo de este sistema de composición, con expresiones vertical (Estado-individuo) y horizontal (víctima y victimario) fue el *plea bargaining* norteamericano, que en su patria ha sido objeto de severas críticas, tanto porque entraña injusticias como porque ha sustituido, *de iure* y *de facto*, al enjuiciamiento penal que descansa en las obligaciones probatorias de las partes —aunque no sólo de ellas— y las potestades sancionatorias del tribunal.

En suma, la gran mayoría de las contiendas penales se resuelve a través del “acuerdo”, la “composición” y el “arreglo” —un método aclimatado en México—, no del hallazgo de la verdad y la aplicación exacta de la ley. ¿Es conveniente que así sea? Reconozco que este método tiene partidarios y adversarios. Dejo la palabra a unos y otros. Sólo pretendo desvanecer la idea de que todas las causas penales se resuelven en la vía judicial y se fundan en la verdad probada. No es así.

En todo caso, recordemos que han transcurrido más de 10 años desde la reforma constitucional de 2008, y algunos menos desde la promulgación del Código Nacional de

Procedimientos Penales, basado en una rectificación llevada a la ley suprema tras el reconocimiento de los extravíos en que se cayó a la hora de aplicar localmente aquella reforma. La rectificación implicó un paso de gran alcance: la centralización —o federalización, si se prefiere llamarla así— del orden jurídico procesal penal en México.

Hay que hacer el honrado balance del nuevo sistema: sin negar sus excelencias, que las hay, ni sus deficiencias, ¿que las hay? Ese balance inició desde hace tiempo. Algunos comentaristas, previsores o profetas, lo acometieron desde antes de que se hiciera la reforma; otros aguardaron los primeros resultados, y otros, últimamente, comienzan a señalar resultados. Tampoco es este el lugar para informar sobre éstos.

Con un par de reflexiones externas —de observadores calificados— inicio y dejo abierto el examen. Citaré primero al profesor Carlos Natarén, que generosamente se refirió a algunas preocupaciones y advertencias mías acerca de ciertos extremos de la reforma procesal. Me calificó como “uno de los analistas más críticos al sistema desde sus inicios y, de hecho, muchas de sus preocupaciones desafortunadamente se han concretado en la realidad con posterioridad”. Muy recientemente, Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, señaló —refiriéndose esencialmente al orden local— que “el nuevo sistema penal no ha ofrecido los resultados para los cuales fue diseñado”, y que los problemas que aquel ha enfrentado en el camino de su implementación “impactan en sus resultados y minan su legitimidad frente a la ciudadanía”.